

REINOSA

El Gobierno no intervendrá por el momento en la Fundación Alto Ebro

El PP acusa al Ejecutivo de «poner las instalaciones al borde del colapso» y el consejero pide más tiempo, hasta conocer las conclusiones de un estudio

18.12.2007 - IÑIGO FERNÁNDEZ

El futuro de la Fundación Alto Ebro sigue sin despejarse, y ni siquiera el debate celebrado ayer en el Parlamento de Cantabria ha servido para eliminar los nubarrones que planean sobre sus instalaciones. Ayer, el Partido Popular (PP), a través de su diputado Luis Carlos Albalá, pidió al Ejecutivo una mayor implicación en el problema. El Gobierno, por su parte, solicitó más tiempo antes de intervenir. Lo hizo a través del consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, y lo hizo basándose en la necesidad de disponer de las conclusiones del último informe jurídico encargado por la administración.

Según Martín, la Fundación Alto Ebro es de carácter privado, por lo que habrá que esperar a determinar «la posibilidad de hacerse cargo de su patrimonio, que no de su deuda, para ver cómo se puede relanzar».

Entre tanto, la deuda continúa incrementándose -se cifra en dos millones de euros-, el personal que se mantiene en la nómina permanece sin cobrar y la viabilidad de las instalaciones sigue sin aclararse.

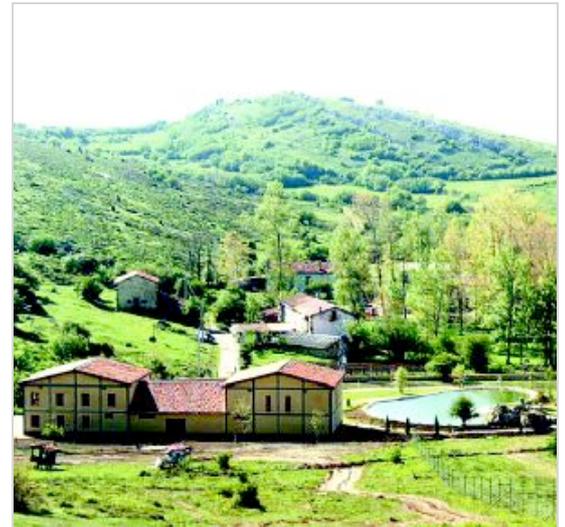
El diputado Luis Carlos Albalá planteó una batería de preguntas parlamentarias con el fin de conocer la postura del Ejecutivo en relación con el futuro de la Fundación, sus instalaciones en la comarca de Campoo, su personal y los animales dependientes de ella. Albalá definió a la Fundación como una «herramienta esencial para el desarrollo de la comarca» y culpó al Ejecutivo de haber actuado con «indiferencia, desinterés, miopía, partidismo, irresponsabilidad y negligencia», al permitir «que una parte del patrimonio caiga en el olvido y puede que en la desaparición».

Albalá habló de «promesas incumplidas» por parte de Dolores Gorostiaga y citó algunos de los compromisos asumidos por la vicepresidenta en agosto de 2005. Como conclusión, aseguró que «es una irresponsabilidad poner al borde del colapso una herramienta imprescindible para el desarrollo de la comarca, y todo porque no fueron protagonistas de su puesta en marcha».

Entidad privada

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente puso el acento en que se trata de una entidad privada «que no tiene ninguna propiedad y nunca tuvo ingresos». Por ello, justificó la espera del Ejecutivo en la necesidad de que «ese informe nos diga si el patrimonio es utilizable o no».

Martín recordó que hasta finales de 2002 se habían entregado por parte del Gobierno 1,9 millones de euros, y que tales entregas se detuvieron al detectar en la Fundación «una sucesión de irregularidades administrativas». Por ello, el consejero defendió la conveniencia de «esperar a conocer qué patrimonio le queda a la Fundación», aunque la espera esté incrementando la incertidumbre acerca de la viabilidad futura de las instalaciones.



El Centro Ambiental de La Lastra es la 'joya' de las instalaciones. / DM